



Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes

ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: www.tandfonline.com/journals/rclc20

Gobernanza de proyectos de infraestructura: pueblos tradicionales y estrategias de conservación y sostenibilidad en la Amazonía

Stephen Perz, Marliz Arteaga, Sinomar Ferreira da Fonseca Junior, Martha Rosero-Peña, Alba Patricia Consuelo Hernández, Waira Jacanamijoy, Flora Macas, Andrea Birgit Chavez Michaelson, Alexandra Sabo & Robert Buschbacher

To cite this article: Stephen Perz, Marliz Arteaga, Sinomar Ferreira da Fonseca Junior, Martha Rosero-Peña, Alba Patricia Consuelo Hernández, Waira Jacanamijoy, Flora Macas, Andrea Birgit Chavez Michaelson, Alexandra Sabo & Robert Buschbacher (28 Feb 2024): Gobernanza de proyectos de infraestructura: pueblos tradicionales y estrategias de conservación y sostenibilidad en la Amazonía, *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes*, DOI: [10.1080/08263663.2024.2312020](https://doi.org/10.1080/08263663.2024.2312020)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/08263663.2024.2312020>



Published online: 28 Feb 2024.



Submit your article to this journal [↗](#)







View related articles [↗](#)



View Crossmark data [↗](#)



Gobernanza de proyectos de infraestructura: pueblos tradicionales y estrategias de conservación y sostenibilidad en la Amazonía

Stephen Perz^a, Marliz Arteaga ^{b,c}, Sinomar Ferreira da Fonseca Junior ^b,
Martha Rosero-Peña ^d, Alba Patricia Consuelo Hernández^e, Waira Jacanamijoy^f,
Flora Macas^f, Andrea Birgit Chavez Michaelson ^g, Alexandra Sabo^h
and Robert Buschbacherⁱ

^aDepartamento de Sociología y Criminología & Derecho, Universidad de Florida, Gainesville, FL, USA; ^bEscuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Florida, Gainesville, FL, USA; ^cUniversidad Amazónica de Pando, Cobija, Bolivia; ^dDirectora de Inclusión Social en la Conservación, Conservación Internacional, Cali, Colombia; ^eConsultora Independiente, Neiva, Colombia; ^fAsociación Tandachiridu Inganokuna, Caquetá, Colombia; ^gAsociación Educativa para la Innovación en las Comunidades (EPIC-N), Centro de Estudios Latinoamericanos, Gainesville, FL, USA; ^hInstituto para la Conservación Integrativa, William & Mary, Williamsburg, VA, USA; ⁱPrograma de Conservación y Desarrollo Tropical, Universidad de Florida, Gainesville, FL, USA

RESUMEN

Las desigualdades sociales en América Latina siguen siendo evidentes con respecto a los derechos sobre la tierra y la tenencia de recursos. Los proyectos de infraestructura constituyen un elemento clave de las políticas que sirven para mantener tales desigualdades, porque la planificación de la infraestructura está dominada por poderosos intereses y excluye a las partes interesadas subalternas. Esto ha motivado un enfoque en temas de gobernanza de la infraestructura y las estrategias de los grupos subalternos para influir en la planificación. Nos enfocamos en la Amazonía, el objetivo de muchos proyectos de infraestructura y el hogar de muchos grupos subalternos que se han movilizado para resistir la infraestructura y mejorar la gobernanza. Presentamos tres estudios de caso en los que las partes interesadas subalternas siguieron estrategias para intervenir en la planificación de la infraestructura. Dos casos se centran en estrategias instrumentales que buscan un impacto directo por enfoques legales y de comunicación. El tercer caso destaca la colaboración como una estrategia indirecta para apoyar estrategias instrumentales, presentando los factores que afectan la colaboración intercultural. Los casos ofrecen experiencias concretas de diferentes estrategias de los pueblos subalternos para intervenir en la planificación de infraestructura para mejorar la gobernabilidad.

ARTICLE HISTORY

Received 31 August 2023
Accepted 25 January 2024

PALABRAS CLAVES

Infraestructura; planificación; indígena; gobernanza; movilización; colaboración; Amazonia; América Latina

KEYWORDS

Infrastructure; planning; Indigenous; governance; mobilization; collaboration; Amazonia; Latin America

Infrastructure project governance: traditional peoples and conservation and sustainability strategies in the Amazon

ABSTRACT

Social inequalities in Latin America remain abundantly evident with regard to land rights and resource tenure. Infrastructure projects constitute a key hallmark of development policies that often serve to maintain such inequalities, in large part because infrastructure planning is dominated by powerful development interests and excludes subaltern stakeholders. This has motivated a focus on issues of governance of infrastructure, and the strategies of subaltern groups to influence infrastructure planning. We focus on the Amazon basin, the target of many infrastructure projects as well as home to many Indigenous groups and other local peoples who have mobilized to resist infrastructure and improve governance using diverse strategies. We report three case studies where subaltern stakeholders pursued strategies to intervene in infrastructure planning. Two cases focus on “instrumental” strategies that seek a direct impact on the planning process, namely legal and communication approaches. The third case highlights collaboration as an indirect strategy to support instrumental strategies, featuring the factors that affect intercultural collaboration. The cases offer concrete experiences of different strategies by subaltern peoples to intervene in infrastructure planning to improve governance.

Introducción

Las desigualdades sociales en América Latina y el Caribe siguen siendo abundantemente evidentes con respecto a los derechos sobre la tierra y el uso de los recursos naturales (p. ej., Carruthers 2008; Kay 2007; Kay y Salazar 2001; Sandholt Jensen y Vittrup Sørensen 2012). Debido a la combinación compleja del legado del colonialismo histórico y el neocolonialismo contemporáneo manifestado en las políticas estatales de desarrollo, el acceso y el control del territorio y los recursos implica profundas asimetrías de poder entre las partes interesadas con intereses en conflicto (p.ej., Carruthers 2008; Svampa 2019). En particular, las comunidades Indígenas y otras comunidades tradicionales continúan enfrentando grandes desafíos en sus reclamos de tierras y prácticas de gestión (p.ej., Balazote y Hocsman 2013; Carruthers 2008; Stocks 2005). La combinación de la demanda del mercado mundial de recursos naturales, las políticas estatales para garantizar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, y una mezcla de racismo, abandono y eliminación de diversos pueblos rurales conspiran para impulsar o permitir diversas formas de apropiación territorial por parte de intereses económicos externos (p. ej., Borrás et al. 2012; Mollett 2016; Svampa 2019). El resultado es una concatenación de resultados negativos, incluido el socavamiento de culturas ancestrales, la autonomía política local, los sistemas de subsistencia establecidos y el funcionamiento sostenible de ecosistemas valiosos.

Los proyectos de infraestructura son un instrumento clave de la política de desarrollo, pero también una causa importante de conflictos por la tierra y otros recursos naturales. Hace tiempo que se reconoce que la infraestructura es un

requisito clave para facilitar la expansión de la actividad económica y los objetivos políticos relacionados (p.ej., Banco Mundial 1994, Bourguignon y Pleskovic 2007; Fay et al. 2017). Sin embargo, eso generalmente ha significado que la planificación estatal de la infraestructura se ha centrado en hacer avanzar los proyectos hacia la implementación, en lugar de dedicar la atención adecuada a la gobernanza de los múltiples impactos (p.ej., Hernández-Gutierrez, Peña-Ramos, y Espinosa 2022; Watkins et al. 2017). El resultado es una construcción sin una gobernanza adecuada, con la evidente eventualidad de conflictos sociales por tierras y recursos naturales con accesibilidad mejorada para una explotación rentable (p.ej., Pereira Covarriubas y Raju 2020; Svampa 2019). Por lo tanto, el proceso de planificación de la infraestructura es clave para garantizar una gobernanza adecuada que evite problemas como invasiones de tierras, conflictos violentos, desplazamientos de grupos tradicionales, y uso insostenible de los recursos.

En la práctica, la planificación de la infraestructura presenta con frecuencia varias deficiencias con respecto a la inclusión social y una adecuada contabilización de los posibles impactos negativos (p.ej., Escalante-Moreno 2017). Un problema se refiere a las consultas limitadas con grupos de partes interesadas clave, en particular pueblos Indígenas y otros grupos tradicionales con tierras cercanas al proyecto propuesto (p.ej., Herrera Chimbo, Señalín Morales, y Pupo Francisco 2016; Oviedo 2021). Otro problema se refiere a los métodos de los estudios de impacto, que a menudo arrojan hallazgos que exageran los beneficios económicos y eluden o subestiman los costos (p.ej., Dourojeanni et al. 2010; Flores Rangel 2015). De manera similar, los estudios de impacto ambiental y social a menudo registran los posibles problemas, pero no detienen la implementación de proyectos, porque los tomadores de decisión prosiguen justificando requisitos legales (p.ej., Dourojeanni et al. 2010; Ritter et al. 2017). Como resultado, se pasan por alto o se ignoran las preocupaciones ambientales y sociales, especialmente las que tienen los interesados locales, como los pueblos Indígenas y otros grupos tradicionales.

Los problemas de planificación de infraestructura para la gobernabilidad han motivado diversas respuestas sociales basadas en el reconocimiento de las amenazas que se derivan de proyectos mal planificados (p.ej., Perz 2012; Schapper, Unrau, y Killoh 2020). La movilización social contra la infraestructura y otros proyectos de desarrollo ha llamado la atención sobre estrategias y tácticas particulares, incluidos enfoques en los que los pueblos locales buscan alianzas con organizaciones externas (p.ej., Carruthers 2008; De Castro, Hogenboom y Baud 2016; Tetreault, McCulligh, y Lucio 2019). Los numerosos casos de respuestas sociales y la diversidad de estrategias plantean interrogantes sobre la identificación de enfoques que sean efectivos para intervenir en la planificación de infraestructura para mejorar la efectividad de la gobernanza (p.ej., Gómez et al. 2014; Silva, Akchurin, y Bebbington 2018). De particular importancia son las estrategias impulsadas por los pueblos Indígenas y otros grupos tradicionales, que a menudo han liderado los esfuerzos a través de diversas formas de protesta y resistencia (p.ej., Mercado Mott y Macias 2016; Rentería 2017). En consecuencia, ellos y otras partes interesadas de base han adquirido conocimientos prácticos especialmente valiosos a partir de su experiencia de primera mano. De manera similar, los pueblos locales que han formado alianzas con organizaciones externas han adquirido una comprensión importante sobre la colaboración como un enfoque para aumentar la capacidad para mejorar la gobernanza de la infraestructura.

En el presente trabajo, abordamos el tema de las estrategias de base para mejorar la eficacia de la gobernanza de la infraestructura, destacando los enfoques colaborativos que involucran a pueblos Indígenas y otros grupos tradicionales apoyados por organizaciones externas. Revisamos brevemente el trabajo previo sobre los requisitos para una gobernanza eficaz, así como los tipos de acciones que pueden respaldar las estrategias para mejorar la gobernanza ambiental. Luego, analizamos brevemente la colaboración como un medio para que los pueblos Indígenas y otros grupos locales aumenten su influencia en los procesos de gobernanza. Luego nos enfocamos en la Amazonía como nuestra región de estudio y presentamos el proyecto Gobernanza e Infraestructura en la Amazonía (GIA), que involucró alianzas para mejorar la efectividad de la gobernanza de la infraestructura. El documento destaca tres estudios de caso del proyecto GIA, que informan experiencias particulares de diferentes partes de la Amazonía en las que los actores locales siguieron distintas estrategias para la gobernanza de la infraestructura, apoyados en sus esfuerzos por organizaciones externas. Nuestra discusión final ofrece reflexiones sobre las lecciones aprendidas de esas experiencias, sobre la importancia de los esfuerzos liderados por las bases, los enfoques colaborativos y las distintas estrategias para mejorar la gobernanza de la infraestructura.

Contexto y marco teórico

La gobernanza ambiental se refiere a los procesos de deliberación de múltiples partes interesadas que conducen a decisiones relacionadas con la gestión de recursos naturales (p.ej., Evans 2012; Lemos y Agrawal 2006). Actualmente existe una gran cantidad de literatura sobre diversos arreglos de gobernanza con respecto a la identificación e inclusión de partes interesadas relevantes, los procesos deliberativos, los medios y la forma de tomar decisiones, su implementación y monitoreo, y la gestión de desigualdades y conflictos (p.ej., Agrawal y Gibson 1999; Armitage, de Loe, y Plummer 2012; Berkes 2017; Dietz, Ostrom, y Stern 2003; Paavola 2007; Perz, Brillhante, y Brown et al. 2008). El concepto de gobernanza se ha aplicado a varias cuestiones de políticas públicas, incluidos los enfoques sectoriales específicos en la política de desarrollo, y las políticas agrarias y ambientales.

La amplitud de temas y arreglos involucrados han llevado al desarrollo de marcos para evaluar la efectividad de la gobernanza (p.ej., Banco Mundial 2020; PNUD 2014). Por lo tanto, el concepto de gobernanza se ha desglosado en muchos requisitos constitutivos que proporcionan criterios para evaluar la eficacia de los procesos y los resultados. Una formulación establecida es el marco “PITA” que destaca la participación, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad (“accountability”) (p.ej., Waddington et al. 2019). Otros marcos que se centran en la gobernanza ambiental han desarrollado aún más estos requisitos al reconocer múltiples dimensiones dentro de cada uno (p.ej., Bennett y Satterfield 2018; Vizeu Pinheiro et al. 2020). Todos estos marcos resaltan cuestiones de justicia social en muchos de estos criterios. Por lo tanto, para que cualquier proceso de gobernanza se considere efectivo, las desigualdades sociales y las cuestiones de poder deben reconocerse en el diseño y la implementación.

Para el caso de la infraestructura, la gobernanza implica un amplio aporte de diversas partes interesadas durante el proceso de planificación (p. ej., Bujis et al. 2016; Wegrich, Kostka, y Hammerschmid 2017). En la práctica, la planificación de la infraestructura

suele ser un proceso de arriba hacia abajo dirigido por el estado, los bancos de desarrollo y las empresas de construcción, en el que las consultas de las partes interesadas equivalen a sesiones de información o comunicados de prensa en lugar de diálogos cooperativos de aprendizaje (p.ej., Groves, Munday, y Yakovleva 2013; Lucas 2012). Por lo tanto, la planificación de infraestructura de arriba hacia abajo excluye o subestima el conocimiento de varias partes interesadas, generalmente para avanzar los proyectos hacia la implementación. Por el contrario, la gobernanza efectiva requiere una inclusión más amplia de las partes interesadas y una verdadera participación en términos de contribuciones a las etapas clave del proceso de planificación que realmente informan las decisiones.

La gobernanza eficaz de la infraestructura también implica una consideración más seria de las ramificaciones sociales y ambientales, más allá de las evaluaciones económicas de viabilidad (p.ej., Glasson y Therivel 2012; Morgan 2012). De hecho, la viabilidad económica es crucial, debido a los grandes costos iniciales de las inversiones públicas para la construcción. Por otro lado, es crucial demostrar que los incrementos posteriores en la actividad comercial valen la pena y, que por lo tanto, debería haber un beneficio social. Pero las consideraciones sociales sobre la distribución de beneficios, especialmente en lo que respecta a los intereses y prioridades de los grupos subalternos, también deben informar las decisiones que resultan del proceso de planificación (p.ej., Esteves, Franks, y Vanclay 2014; Rosenbaum 2017; Vanclay 2003). De manera similar, las evaluaciones de impacto ambiental deben constituir más de los pasos legalmente requeridos en el proceso de planificación, de modo que los hallazgos de grandes impactos negativos requieran al menos el rediseño o cambio de ruta de la infraestructura, si no la cancelación de proyectos problemáticos (p.ej., Devlin y Ya, 2008; McCullough 2017).

El dominio de los actores poderosos como el estado sobre la planificación de la infraestructura plantea preguntas sobre cómo otras partes interesadas pueden seguir estrategias para obtener una mayor influencia sobre el proceso. Ya hay muchas experiencias de planificación de infraestructura dirigida por el estado que encontraron resistencia por parte de los actores subalternos. La pregunta entonces se refiere a las estrategias empleadas por los grupos subalternos en los casos en que ganaron influencia sobre el proceso y sus resultados. En el contexto de la infraestructura, la gobernanza efectiva reflejaría las contribuciones de los diversos interesados y la incorporación de consideraciones sociales y ambientales en la toma de decisiones. Esto incluiría particularmente a los pueblos Indígenas y otros grupos tradicionales, así como a las organizaciones de base. Esto también incluiría organizaciones de apoyo externas, incluidas ONGs, universidades y gobiernos locales y regionales.

Destacamos dos amplias categorías de estrategias para mejorar la gobernanza de la infraestructura: estrategias instrumentales y colaborativas. Las estrategias instrumentales buscan intervenir directamente en el proceso de planificación (p.ej., Snow, Soule, y Kriesi 2004). Por lo tanto, las estrategias instrumentales enfatizan las prioridades de ampliar la participación de las partes interesadas e incorporar las preocupaciones sociales y ambientales en la toma de decisiones. El objetivo de las estrategias instrumentales sería, por lo tanto, detener proyectos problemáticos durante la planificación, o pausarlos para modificarlos y evitar impactos negativos. De no ser así, el objetivo de las estrategias instrumentales sería incorporar medidas de mitigación en los proyectos en curso para reducir sus impactos negativos.

Por otro lado, las estrategias colaborativas buscan aumentar la capacidad efectiva de las partes interesadas afectadas y las organizaciones de base al incluir entidades externas que brindan apoyo (p.ej., Huxham y Vangen 2004; Wang y Soule 2012). Las estrategias colaborativas buscan así posibilitar o magnificar el impacto de las estrategias instrumentales. Las organizaciones externas brindan sus recursos o experiencia a las partes interesadas clave que buscan intervenir en el proceso de planificación. Es importante destacar que los grupos Indígenas y otros tradicionales deben definir las necesidades que deben abordar las organizaciones externas, para garantizar que se construya o aumente la capacidad en apoyo de las estrategias instrumentales.

Abordamos las estrategias instrumentales, que en sí mismas son diversas, utilizando el marco de acción de conservación de Conservation Measures Partnership (CMP), versión 2.0 (CMP 2020). Enfatizamos la importancia de las preocupaciones ambientales en la gobernanza de la infraestructura, así como las preocupaciones sociales a través de las partes interesadas que tienden a expresar preocupaciones ambientales. El marco de CMP destaca el papel de los pueblos locales en el desarrollo, la búsqueda y la adaptación de estrategias instrumentales para mejorar la gobernanza de la infraestructura. El marco de CMP diferencia entre diez tipos principales de acciones de conservación, cada una con múltiples subcategorías. Tales acciones incluyen, por ejemplo, la investigación, desarrollo de capacidades, comunicación, enfoques legales, acción directa y promoción de políticas públicas, entre otros (CMP 2020). En ese sentido, las estrategias instrumentales equivalen a la selección e implementación de múltiples tipos de acciones, de modo que un conjunto de diferentes tipos de acciones constituye una estrategia más amplia.

Con respecto a las estrategias de colaboración, los pueblos Indígenas y otros pueblos tradicionales también suelen buscar el apoyo de organizaciones externas a través de alianzas (p.ej., Adade Williams, Sikutshwa, y Shackleton 2020; Dove 2006). En la medida en que los pueblos locales puedan formar alianzas con organizaciones externas que proporcionen capacidades, conocimientos y conexiones complementarias, la colaboración puede aumentar la influencia de las partes interesadas subalternas. Además, en la medida en que los pueblos locales definan la agenda para la estrategia de colaboración y, por lo tanto, las formas específicas de apoyo de organizaciones externas, la alianza puede amplificar el impacto de las estrategias instrumentales. Esto no solo ayuda a evitar las relaciones de poder asimétricas entre los socios colaboradores, sino que también ayuda a centrar la aplicación de los recursos humanos y de otro tipo en el apoyo a las poblaciones locales. Eso, a su vez, es clave para su empoderamiento y, por lo tanto, su capacidad para influir en el proceso de planificación de la infraestructura.

Región de estudio

Nos enfocamos en el caso de la Amazonía, una región de importancia mundial por sus bosques y biodiversidad, así como por su diversidad cultural (p.ej., Davidson et al. 2012; Marengo et al. 2018). La Amazonía también ha sido importante como espacio de frontera priorizado para el desarrollo, en particular a través de programas de infraestructura para la integración regional en los circuitos globales de productos básicos (p.ej., Killeen 2007; Wagner Tizón y Gadea Duarte 2002). De particular importancia para los propósitos presentes es la historia de los proyectos de infraestructura de la Amazonía en los que la planificación generalmente no ha logrado

incorporar o tomar en serio varios criterios necesarios para una gobernanza eficaz (p. ej., Alencar et al. 2004; Dourojeanni et al. 2010). Como región fronteriza, la Amazonía ha estado sujeta a múltiples fases de programas de infraestructura impuestos de arriba hacia abajo por los gobiernos nacionales apoyados por bancos de desarrollo y empresas constructoras. Esto ha sido especialmente destacado en Brasil, como en programas como *Avanço Brasil* en la década de 1990 y los *Planos Plurianuais* en la década de 2000 (p.ej., Fearnside y Laurance 2012; Verdum 2007; Zhouri 2010). Brasil también impulsó programas de infraestructura continental, entre los que destaca la *Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)*, posteriormente continuada como *Consejo Suramericano de Planificación de Infraestructura (COSIPLAN)*.

Bajo tales programas, las partes interesadas externas de alto nivel generalmente han gestionado la planificación de la infraestructura, en términos de cómo proyectos se priorizan, cómo se planifican y cómo se implementan (p.ej., Fearnside y Laurance 2012; Zhouri 2010). En consecuencia, muchos proyectos de infraestructura en la Amazonía han seguido adelante con consultas limitadas a las partes interesadas y evaluaciones de impacto inadecuadas. Cuando se elaboran, los planes para la mitigación de los impactos negativos o el apoyo a las iniciativas de desarrollo sostenible suelen tener fondos insuficientes. El resultado ha sido una historia de casos de alto perfil de daños ambientales que involucran deforestación, pérdida de especies, degradación del suelo y daños a las cuencas hidrográficas, así como problemas sociales que incluyen violencia rural, desplazamiento de pueblos tradicionales, pobreza urbana y numerosas formas de delincuencia (p.ej., Fearnside, Laurance, et al. 2012; Verdum 2012).

La Amazonía también tiene una historia de movilización social en respuesta a proyectos de infraestructura mal planificados. Ya sean carreteras o represas hidroeléctricas, los grupos Indígenas y otros pueblos locales se han movilizad con frecuencia para exigir una mayor participación en la planificación de proyectos o la detención total de los proyectos antes de su implementación (p.ej., Correa, Erikson, y Surrallés 2016). De particular interés son las estrategias instrumentales empleadas por los pueblos locales que buscan resistir o influir los procesos de planificación de la infraestructura. Dichas estrategias han incluido manifestaciones de alto perfil como bloqueos de carreteras, así como estrategias de comunicación, acciones legales y otras (p.ej., Mora et al. 2014; Sánchez Jaramillo 2021). Los pueblos locales a menudo han empleado estrategias de colaboración, buscando alianzas con organizaciones externas, frecuentemente ONGs, universidades, organizaciones religiosas y otras.

El proyecto *Gobernanza e Infraestructura en la Amazonía (GIA)* ofrece un ejemplo de un esfuerzo colaborativo entre organizaciones externas y pueblos y grupos locales para apoyar sus estrategias para mejorar la gobernanza de la infraestructura (GIA 2022). GIA fue coordinado por un equipo de proyecto basado en el programa de *Conservación y Desarrollo Tropical (TCD)* del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, con financiamiento de la Fundación Gordon y Betty Moore. GIA se estructuró para operar a través de colaboraciones entre el equipo de UF GIA y numerosos socios en la Amazonía, que incluían tanto grupos de base como organizaciones, ONGs y universidades. GIA se concibió con el objetivo central de fomentar y fortalecer una comunidad de práctica y aprendizaje (*community of practice and learning, COPL*) centrada en estrategias para mejorar la gobernanza de la infraestructura (GIA 2022).

Geográficamente, GIA se organizó en torno a la colaboración con socios en cuatro “mosaicos” de áreas protegidas y territorios Indígenas en la Amazonía que son sujetos a nuevos proyectos de infraestructura. Estos mosaicos fueron: 1) el sur de Amazonas y el norte de Rondônia en Brasil, la zona del tramo medio de la carretera BR319; 2) la parte alta del río Madera en la frontera de Brasil y Bolivia, la zona del Complejo Madera; 3) departamento de Caquetá en Colombia, en la transición AndesAmazonas, y el sitio de los proyectos viales propuestos; y 4) el departamento de Loreto en Perú, objetivo de proyectos de hidrovías y carreteras (GIA 2022). Aquí nos enfocamos en los primeros tres mosaicos, donde los esfuerzos de GIA para construir la COP-L destacaron distintas estrategias instrumentales y colaborativas de los pueblos locales. En cada mosaico, el equipo de GIA realizó diversas actividades, como talleres e investigaciones de campo, para apoyar las estrategias de los socios locales para mejorar la gobernanza de la infraestructura (GIA 2022). En el resto de este documento, describimos las distintas estrategias de base y cómo el equipo de GIA y otras organizaciones externas las apoyaron. Específicamente, reportamos experiencias in el uso de estrategias legales (BR-319, Brasil), estrategias de comunicación (Alto Madera, Bolivia y Brasil) y colaboración en apoyo de estrategias instrumentales (Caquetá, Colombia) por parte de grupos subalternos que buscan mejorar la gobernanza de la infraestructura en la Amazonía.

Estrategias para mejorar la gobernanza de infraestructura: experiencias y lecciones aprendidas

El consentimiento libre, previo e informado como estrategia legal en el corredor BR-319, Brasil

El caso de estudio en Brasil se centra en la carretera BR-319, un corredor vial de aproximadamente 870 km que va de norte a sur desde Manaus, la capital del estado de Amazonas, hasta Porto Velho, la capital de Rondônia. El “tramo medio” de la BR-319 atraviesa varios territorios Indígenas (Ferrante, Gomes, y Fearnside 2020) y áreas protegidas (Carlos y de Meirelles 2018).

El Gobierno de Brasil propuso la pavimentación de la BR-319, y los políticos regionales han argumentado que el proyecto permitiría un desarrollo sostenible. En junio de 2020, el Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte (DNIT) de Brasil emitió un aviso público sobre los planes para pavimentar el tramo medio de 405,7 km de la BR-319 (DNIT 2021). Posteriormente, se criticó al DNIT por no realizar consultas con los pueblos Indígenas a lo largo del camino (MPF 2021a). Este fue un descuido legal importante por parte del Gobierno de Brasil, que en 2002 había ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos Indígenas (OIT 1989; Brasil 2004). Como resultado de la OIT 169, el proceso de concesión de licencias para cualquier proyecto de infraestructura en Brasil requiere el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI, o “Free, Prior and Informed Consent” o FPIC) de las partes interesadas que se verían afectados, incluidos los pueblos Indígenas (REET 2020). En términos más generales, el anuncio del DNIT de avanzar en la pavimentación no consideró los impactos sociales y ambientales (REET 2020; Fearnside 2020). El DNIT no siguió los requisitos para una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como fue previamente acordada con el Instituto Brasileño del

Medio Ambiente (IBAMA). En particular, la EIA para la BR-319 no incluyó el Estudio del Componente Indígena (ECI) ni un proceso de CLPI con los pueblos Indígenas (OPIPAM 2021).

La EIA para la BR-319 incluye una larga lista de impactos negativos de la pavimentación de la BR-319 (ENGESPRO 2020; Fearnside 2020). El anuncio del DNIT sin cumplir con los requisitos de licencia generó expectativas entre las partes interesadas en la explotación de recursos a lo largo del corredor BR-319 (MPF 2021a). En los modelos de simulación dinámica, los escenarios de “negocios como siempre” habían demostrado que la pavimentación de la BR-319 causaría una deforestación y una degradación forestal generalizadas (Barber et al. 2014; Fearnside 2020; Ferrante, Gomes, y Fearnside 2020; Santos, Yanai, et al. 2018). Desde agosto de 2020, ha aumentado la deforestación en el corredor BR-319, como en otras partes de la Amazonía (Fearnside 2022; Ferrante y Fearnside 2022). El aumento de la deforestación también afecta negativamente a las comunidades tradicionales e Indígenas al amenazar los recursos forestales y acuáticos esenciales para sus medios de vida y culturas (Fearnside 2020; REET 2020).

El caso BR-319 es típico en el contexto brasileño con respecto a la falta de CLPI. A mediados de la década de 2010, había 3000 proyectos de desarrollo en Brasil que afectarían a los pueblos Indígenas, pero carecían de CLPI (Rojas Garzón 2016). Varios estudios han demostrado que el Gobierno de Brasil ha incumplido rutinariamente con los requisitos de CLPI por parte de los pueblos Indígenas (APIB 2013; Rojas Garzón 2016; Saure 2020).

A la luz de la ratificación de Brasil de la OIT 169 y el requisito de CLPI en la planificación de infraestructura, los grupos Indígenas en Brasil han adoptado una estrategia legal para resistir proyectos de infraestructura no deseados, exigiendo CLPI en el proceso de concesión de licencias. En particular, los grupos Indígenas en el corredor BR-319 han exigido consultas públicas, realizadas de manera abierta y transparente, de buena fe con información precisa y libres de cualquier forma de intimidación o manipulación, según la OIT 169.

Con ese fin, los grupos Indígenas han buscado el apoyo de organizaciones externas para emprender acciones legales contra el Gobierno de Brasil al exigir el CLPI en la planificación de infraestructura. Los grupos Indígenas han formado alianzas con ONG ambientalistas. Una coalición de ONG ambientalistas creó el Observatorio BR-319 para brindar información sobre el proyecto BR-319. El Observatorio emitió una carta pública en oposición al proceso de concesión de licencias sin CLPI y señaló otros problemas de participación de las partes interesadas en las audiencias públicas (Observatorio BR-319 2021). Además, grupos Indígenas y ONGs ambientalistas se acercaron al Ministerio Público Federal (MPF) del Gobierno de Brasil en busca de apoyo legal. El MPF encontró que los grupos Indígenas tenían estancia legal y, en consecuencia, se opuso a las audiencias públicas para BR-319 porque carecían de CLPI. Además, el MPF hizo una lista de recomendaciones al DNIT y al IBAMA, y manifestó apoyo por un Plan de Fiscalización, Vigilancia y Protección Permanente en las tierras Indígenas que serían impactadas por la pavimentación de la BR-319 (MPF 2021a, 2021b). Además, el MPF sugirió la suspensión de todas las actividades de planificación relacionadas con BR-319 hasta que se lleve a cabo el proceso de CLPI con la plena participación de todos los pueblos tradicionales que se verían afectados por el proyecto. De esta manera, el MPF brindó orientación legal en cuanto la consulta con las poblaciones tradicionales. Al hacerlo, el MPF abogaba por el

establecimiento de criterios básicos para cumplir con el CLPI con los pueblos tradicionales tal como lo ratificó Brasil (MPF 2021b).

Más allá de las alianzas, los pueblos Indígenas a lo largo de la carretera BR-319 se movilizaron para garantizar el uso de protocolos particulares de CLPI basados en prácticas culturales Indígenas (Fonseca-Junior 2021). El “CLPI Indígena” implica protocolos basados en la cultura Indígena como un medio para ejercer una mayor influencia sobre la planificación de la infraestructura. El CLPI Indígena constituye un instrumento legal que indica específicamente a quién se debe consultar, quién debe llevar a cabo la consulta, cuándo y dónde se debe realizar la consulta, cómo los pueblos Indígenas tomarán decisiones y qué pueden esperar de las consultas en términos de resultados (Papillon y Rodon 2017; Tomlinson 2019). De esa manera, las prácticas e intereses culturales Indígenas son reconocidos como un medio para asegurar sus derechos al CLPI. El MPF ha expresado gran interés en el CLPI Indígena como modelo a seguir.

La importancia del CLPI en el caso BR-319 llamó la atención sobre las estrategias legales como un medio para mejorar la gobernanza de la infraestructura en la Amazonía durante el proyecto GIA. Los participantes del GIA COP-L que trabajan en el corredor BR-319 compartieron así sus estrategias y sus lecciones aprendidas con sus contrapartes de otros mosaicos (GIA 2022). Participantes del GIA COP-L de otros mosaicos también dirigieron su atención a las estrategias legales para la gobernanza de la infraestructura y se acercaron a abogados y otros defensores legales. Mientras que en el caso BR-319 la estrategia legal destacó los intereses y preocupaciones de los grupos Indígenas, entre otros participantes de GIA, el aspecto de género fue muy importante, y las estrategias legales proporcionaron un medio para que las mujeres ganaran voz al expresar sus preocupaciones y resistir proyectos de infraestructura indeseables. En la experiencia de la BR-319, las estrategias legales proporcionaron una vía para que los grupos subalternos intervinieran en los procesos de planificación de infraestructura. Al mismo tiempo, la búsqueda de estrategias legales también destacó la importancia de la colaboración de los pueblos locales con organizaciones externas, ya sean fundaciones legales, ONG conservacionistas o agencias gubernamentales.

La co-producción y difusión del conocimiento como estrategia de comunicación contra represas hidroeléctricas en el Alto Madera, Bolivia y Brasil

El caso de estudio entre Bolivia y Brasil se centra en el Complejo Madera de represas hidroeléctricas en el río Madera, el afluente más grande del propio Amazonas. Esta región, conocida como el Alto Madera, es alimentada por varios otros grandes ríos, incluidos el Beni, Madre de Dios, Mamoré y el Iténez o Guaporé, que se unen alrededor de la frontera binacional entre el norte de Bolivia y el suroeste de Brasil. El Alto Madera es de vital importancia para la vida acuática, especialmente para los peces migratorios que recorren grandes distancias (7000 a 8000 km) para reproducirse en aguas bolivianas (Doria, Duponchelle, y Lima et al. 2018; Santos, Pinto-Coelho, et al. 2018). Sin embargo, el Alto Madera es ahora el foco del Complejo Madera de represas hidroeléctricas. A mediados de la década de 2000, se construyeron las represas de Jirao y Santo Antonio; ahora se están planificando las represas Ribeirão (Binacional) y Cachuela Esperanza (p.ej., Atentas 2009; Fearnside 2014). Las represas interrumpen las migraciones de peces y amenazan los medios de subsistencia que dependen de las actividades pesqueras de las comunidades ribereñas en Bolivia, Brasil

y Perú (p.ej., Doria, Dutka-Gianelli, y de Sousa et al. 2021; Santos, Pinto-Coelho, et al. 2018). Además, las represas afectan las inundaciones periódicas que provocan desastres a los agricultores de las comunidades ribereñas.

La planificación de represas requiere un extenso proceso de evaluación y concesión de licencias, y en general se ha llevado a cabo las instalaciones hidroeléctricas a pesar de sus impactos negativos conocidos en la Amazonía. Una de las razones es que los gobiernos, los bancos y las empresas constructoras han tendido a resaltar la importancia estratégica de las represas para satisfacer la demanda de energía en grandes áreas urbanas para poblaciones en crecimiento y sectores económicos clave (p.ej., Atentas 2009; Fearnside 2014). Tales perspectivas han tendido a prevalecer en los medios nacionales ante el público, en lugar de perspectivas más críticas, incluidas las derivadas de la investigación científica y las experiencias vividas por las comunidades afectadas. Eso ha motivado la movilización de la sociedad civil en el sudoeste amazónico involucrando a comunidades, organizaciones de base, universidades, ONGs conservacionistas y otros. La clave de esa movilización es una estrategia de comunicación para contrarrestar las perspectivas de “negocios como siempre” sobre las represas hidroeléctricas.

Las partes interesadas en el Alto Madera, con el apoyo del proyecto GIA, han seguido una estrategia de comunicación para contrarrestar la promoción de más represas en el Complejo Madera. Lo que define la estrategia de comunicación ha sido la coproducción de conocimiento mediante la combinación de métodos científicos técnicos con la experiencia vivida y las prioridades de las personas y organizaciones locales. Los socios de GIA, por lo tanto, han llevado a cabo una investigación participativa sobre la gobernanza de las represas en el Alto Madera. La estrategia de comunicación tenía tres elementos clave. Primero, trabaja a partir de las necesidades de conocimiento de las organizaciones locales que buscan disputar los intereses de negocios como siempre para definir las prioridades de investigación. En otras palabras, reconocer el valor de la experiencia vivida por las comunidades locales y la estrategia general de las organizaciones de base para identificar y orientar las prioridades de investigación. En segundo lugar, constituir equipos de investigación combinando profesores universitarios y personal de ONGs como supervisores de estudiantes universitarios de comunidades que se verían afectadas por las represas. Este integra los aportes del personal técnico de la academia con las ONGs dedicadas al trabajo de conservación aplicada y los jóvenes de las comunidades afectadas. En tercer lugar, la coproducción participativa de conocimientos facilita la difusión de los hallazgos a las diversas partes interesadas. La participación de diversas partes interesadas en la investigación, incluidos los jóvenes de las comunidades afectadas, amplía la gama de personas que obtienen de primera mano acceso temprano a nuevos conocimientos para una difusión más amplia.

Al principio del proyecto GIA, la COP-L del Alto Madera realizó un taller internacional en el que las partes interesadas priorizaron sus necesidades. Para apoyar la estrategia de comunicación, los socios de GIA priorizaron desarrollar capacidades de las comunidades rurales, las organizaciones de base y los estudiantes universitarios para contribuir a la producción y difusión del conocimiento. Esto se debe a que, en la Amazonía, actores locales tienen acceso limitado a la formación experiencial en la investigación aplicada. La constitución de equipos de investigación sobre temas seleccionados por organizaciones de base, con estudiantes universitarios de las comunidades locales, que serían apoyados y capacitados por profesores universitarios y personal de

ONGs, ofrece una manera para apoyar la investigación que combina el desarrollo de capacidades con la coproducción de conocimiento.

En el proceso, la estrategia de comunicación también creó una red para la difusión del conocimiento. Por un lado, la COP-L del Alto Madera constituyó una red de científicos de varias universidades e ONGs en Brasil, Bolivia y Estados Unidos. Los científicos, a su vez, sirvieron como mentores de los estudiantes, quienes realizaron investigaciones para sus tesis. Por otro, los materiales de investigación fortalecieron el conocimiento de las comunidades que vieron sus experiencias y problemas de la vida cotidiana reflejados en producciones científicas. La coproducción de estudiantes de comunidades con socios de la COP-L hizo que los productos resultantes fueran accesibles para las comunidades y rigurosos para su difusión a otros grupos.

La COP-L del Alto Madera siguió un proceso de múltiples etapas para combinar la creación de redes con el desarrollo de capacidades en apoyo de la investigación participativa para la acción comunicativa. La COP-L de Alto Madera emitió una convocatoria para trabajos de investigación sobre temas priorizados por organizaciones comunitarias preocupadas por la planificación de represas en el lado boliviano de la frontera binacional. La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes en etapa de investigación de tesis de la Universidad Amazónica de Pando (UAP) en el norte de Bolivia. La convocatoria permitió avanzar en la investigación de importantes problemas de la región, además de formar talento humano en la región norte amazónica de Bolivia.

En la primera etapa, 17 estudiantes de 9 áreas diferentes de estudio de la UAP fueron seleccionados por los socios de la COP-L. Los estudiantes asistieron un curso sobre métodos de investigación en línea ofrecido por el equipo GIA de la UF. Durante el curso, los estudiantes elaboraron sus propuestas de investigación. Las propuestas fueron evaluadas por científicos de la COP-L del Alto Madera. El proceso de revisión condujo a la identificación de siete propuestas de apoyo.

En la segunda etapa, los socios del Alto Madera asignaron los estudiantes a los científicos de la COP-L, formando los equipos de investigación. Cada estudiante fue apoyado por un mentor de la facultad de UAP, así como por otros científicos de la COP-L del Alto Madera. Así, los científicos supervisaron a los estudiantes investigadores durante su trabajo de campo, análisis, redacción y presentación de los resultados en un simposio. Debido a que la segunda etapa sucedió durante la pandemia de COVID-19, la COP-L del Alto Madera ajustó el cronograma. COVID-19 también impidió que dos estudiantes completaran sus proyectos de investigación. En consecuencia, quedaron cinco estudiantes, de cuatro programas de formación. Los proyectos de investigación involucraron a varias comunidades en el lado boliviano de la cuenca del Alto Madera.

La tercera etapa avanzó en la estrategia de comunicación a través de la gestión del conocimiento involucrando tanto los informes de los proyectos de investigación como los documentos estratégicos sobre la práctica comunicativa. Esto involucró tres actividades particulares: 1) elaboración de los productos de investigación y documentos estratégicos, 2) socialización de los productos de investigación y documentos estratégicos a las organizaciones socias de la COP-L, y 3) difusión de los productos a las comunidades del Alto Madera. Los equipos de investigación generaron numerosos productos, entre ellos 1) tesis de investigación de los estudiantes de la UAP; 2) folletos y videos con los resultados de la investigación para audiencias diversas; y 3) publicación de un libro con los cinco estudios de investigación (GIA 2022). Además, los socios del Alto Madera COP-

L también produjeron documentos estratégicos, que incluyen 1) una estrategia de comunicación para mejorar la gobernanza de las represas, 2) una guía para la organización e implementación de talleres comunitarios participativos para apoyar las intervenciones de base en la planificación de infraestructura, y 3) una guía de protocolo para garantizar el CLPI durante la planificación de la infraestructura (GIA 2022).

El enfoque en la práctica comunicativa y la combinación de la coproducción del conocimiento y la difusión inclusiva del conocimiento lograron fortalecer los lazos entre las organizaciones socias en la COP-L del Alto Madera, en particular entre las organizaciones de base y las comunidades ribereñas con organizaciones externas como universidades y ONGs. Las actividades de investigación introdujeron una experiencia participativa de investigación que apoya la comunicación científica y de base para mejorar la gobernanza de las represas durante su planificación. El énfasis en el desarrollo de capacidades benefició a numerosas partes interesadas, incluidos estudiantes de comunidades, organizaciones de base y profesores universitarios. El emparejamiento de proyectos de investigación participativos con la producción colaborativa de documentos estratégicos proporcionó un canal listo desde la coproducción de conocimientos hasta varias vías para la difusión de conocimientos sobre los impactos negativos de las represas.

Estas acciones conjuntas en la COP-L del Alto Madera crean las condiciones para que futuras acciones comunicativas intervengan en la planificación de la infraestructura. Las comunidades rurales ganaron voz al compartir su experiencia vivida para informar las investigaciones. Las organizaciones de base adquirieron experiencia de liderazgo al definir la estrategia de comunicación y compilar las prioridades de investigación de las comunidades como insumos a la coproducción de conocimiento estratégico. Esas partes interesadas adquirieron experiencia colaborativa con organizaciones externas para realizar investigaciones para implementar la estrategia de comunicación. La estrategia apoyó el fortalecimiento de una red de diversas partes interesadas subalternas de conocimientos para impugnar los reclamos de los actores hegemónicos en el proceso de concesión de licencias para represas en el Alto Madera.

La colaboración intercultural como estrategia colaborativa en Caquetá, Colombia

El tercer caso se refiere a los esfuerzos para implementar infraestructura en la Amazonía colombiana. Un momento clave en la historia reciente de Colombia fue la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los Acuerdos de Paz significaron que ciertas partes de la Amazonía colombiana que habían sido controladas por las FARC ahora podrían ser penetradas por otras partes interesadas (p.ej., Delgado y Vásquez 2015). Eso ha facilitado la apropiación de antiguas rutas que antes mantenían las FARC en departamentos como Putumayo, Caquetá y Cauca. Posibilitó la entrada de intereses económicos madereros, mineros y territoriales, que reclamaban tierras Indígenas y recursos naturales. Entonces, las comunidades Indígenas en tales áreas se enfrentaban así a una nueva amenaza para sus culturas en términos de sus territorios, recursos naturales y medios de subsistencia (p.ej., Ramírez 2022).

Tales invasiones suceden en el contexto histórico de violencia política en Colombia (Human Rights Watch Colombia 2020). Si bien gran parte de la violencia política de Colombia ocurrió en las ciudades y se centró en las hostilidades entre las élites políticas

y sus seguidores, también se centró en los grupos Indígenas, líderes comunitarios y laborales y ambientalistas, a menudo en pueblos pequeños y áreas rurales, incluso en la Amazonía (p.ej., Delgado y Vásquez 2015). En consecuencia, después de los Acuerdos de Paz en 2016, la violencia en Colombia paradójicamente se ha intensificado. En particular, la violencia contra los líderes comunitarios en la Amazonía ha aumentado. Para el 2020 han sido asesinados más de 1000 líderes sociales, Indígenas y ambientales (p.ej., Duarte 2020; González Perafán 2020). Por lo tanto, la incursión de intereses extractivos en la Amazonía ha resultado no solo en un uso insostenible de los recursos, sino también en daños a los pueblos Indígenas.

Mientras tanto, el estado colombiano ha buscado avanzar en el desarrollo de infraestructura en la Amazonía. El estado colombiano ve la infraestructura como un medio para promover el crecimiento económico. Durante las últimas dos décadas, el estado colombiano ha tendido a excluir a los actores locales y las comunidades Indígenas de los procesos de planificación de la infraestructura. Si bien el presidente Juan Manuel Santos decidió en 2018 no construir la Carretera Marginal, el estado colombiano avanza con otros proyectos de infraestructura. Esto ha ocurrido en un contexto donde el estado ha mostrado poco interés en consultar a los pueblos locales. En 2020, el presidente Iván Duque se negó a reunirse con la asamblea del movimiento indígena La Minga. Como consecuencia, entre 8.000 y 10.000 personas marcharon a la capital nacional Bogotá para proponer un debate político con el presidente, pero nuevamente Duque se negó a dialogar (PARES 2020).

Esto refleja una profunda división cultural en las visiones del mundo entre las sociedades occidentales e Indígenas. Mientras que la sociedad occidental sigue una ontología dualista, que presenta diferencias entre los humanos y la naturaleza, muchos grupos Indígenas siguen una ontología relacional, que destaca las relaciones socioecológicas (p.ej., Blaser 2013; Escobar 2018). Las diferencias ontológicas pueden parecer abstracciones oscuras, pero definen cómo se diseñan los procesos de planificación y cómo se toman e implementan las decisiones de gobernanza. Las ontologías dualistas pueden conducir a procesos de planificación y decisiones de gobernanza que privilegian el crecimiento económico a corto plazo sobre la sostenibilidad cultural y ambiental a largo plazo. Por el contrario, las ontologías relacionales subrayan cómo los procesos de planificación y las decisiones de gobierno impactan las culturas en relación con los sistemas biofísicos.

Ante la violencia de nuevos intrusos y el abandono del estado, los pueblos Indígenas y tradicionales han seguido una estrategia de colaboración intercultural con organizaciones externas. Los grupos Indígenas en Colombia han estado organizados durante mucho tiempo y cuentan con el apoyo de ONGs, incluidas organizaciones religiosas y de conservación. Si bien las estrategias instrumentales, como los enfoques legales, son cruciales para mejorar la gobernanza de la infraestructura, la colaboración puede respaldar varias estrategias instrumentales. En Colombia, los grupos Indígenas han buscado así la colaboración intercultural para apoyar acciones instrumentales que incluyen procedimientos legales, comunicaciones estratégicas y protestas de acción directa. Por lo tanto, se vuelve importante identificar las lecciones aprendidas de las experiencias Indígenas de colaboración intercultural con respecto a la gobernanza de la infraestructura. En particular, es útil abordar dos dimensiones de factores: 1) aquellos que son externos e internos a los colaboradores, y 2) aquellos que facilitan o socavan la colaboración. Se puede cruzar

esas dos dimensiones, y por eso considerar factores externos facilitan o socavan la colaboración, igual factores internos que la facilitan o la impiden. Si bien los factores externos son más difíciles de controlar, los hallazgos sobre los factores internos pueden informar la práctica colaborativa y, por lo tanto, la gobernanza.

En el contexto del proyecto GIA, los socios del mosaico de Colombia realizaron estudios de casos de colaboración intercultural. Aquí nos enfocamos en el pueblo Indígena Ingá de Caquetá en el sur de Colombia, y su colaboración intercultural con Amazon Conservation Team (ACT), una ONG colombiana, y otras organizaciones externas. Nos enfocamos en este caso en porque su colaboración intercultural se ha traducido en logros importantes con respecto a la gobernanza ambiental y los derechos Indígenas en Colombia. Primero, aseguraron la declaración oficial de un Parque Nacional en el territorio indígena Ingá a través de la participación activa de los Indígenas. En segundo lugar, fueron fundamentales para detener la Carretera Marginal, que habría atravesado varios territorios Indígenas. En tercer lugar, desarrollaron modelos de instituciones educativas Indígenas a través de la construcción de escuelas Indígenas con un modelo de currículo indígena que se puede replicar en otros lugares.

Los socios colombianos de UF y GIA desarrollaron conjuntamente una metodología de acción participativa para investigar los factores que afectan la colaboración intercultural. Los socios en el país incluyeron co-investigadores Indígenas. El equipo de investigación intercultural diseñó la estrategia para la recopilación de datos, que involucró entrevistas en profundidad con informantes clave que generaron datos cualitativos. Los investigadores entrevistaron no solo a los Indígenas Ingá, sino también a representantes de organizaciones externas con las que los Ingá han colaborado.

El equipo de investigación compiló y codificó las respuestas para identificar respuestas con significados similares. La codificación también clasificó las respuestas en términos de si denotaban 1) factores externos o internos, y 2) factores facilitadores o inhibidores relacionados con la colaboración intercultural. Para los fines presentes, nos centramos en los factores que se mencionaron con mayor frecuencia. Informes más detallados de los hallazgos están disponibles en el sitio web del proyecto GIA (2022).

Fueron dos factores externos que más facilitan la colaboración intercultural. La relación de los colaboradores con el estado colombiano fue el factor externo más comúnmente mencionado. Ésta otorga legitimidad y sostenibilidad a los procesos emprendidos en la colaboración al aprovechar oportunidades que ofrece el marco legislativo colombiano para hacer efectivos los derechos de los pueblos Indígenas. Otro factor externo facilitador involucra las prácticas engañosas de terceros con intereses en avanzar la infraestructura. Terceros como intereses extractivos buscan generar conflictos y sospechas entre comunidades locales para impulsar la implementación rápida de proyectos de infraestructura. Tales acciones llaman la atención de comunidades y las motivan a buscar alianzas interculturales con organizaciones externas como colaboradoras. Dichas alianzas a su vez posibilitan definición de estrategias instrumentales, incluso legales, como la consulta previa.

También, hay factores externos que impiden la colaboración intercultural y por eso su incidencia política. Unos de dichos factores más mencionados involucran actitudes negativas a los pueblos Indígenas y que dejan al descubierto diversos tipos de violencia. La violencia simbólica detrás de los estereotipos racistas y discriminatorios está enraizada en la relación entre los grupos sociales

colombianos desde la época colonial. La violencia de hecho ejercida por actores armados lícitos e ilícitos ha estado también en la cotidianidad de los pueblos Indígenas en Colombia.

Los factores internos facilitadores son aspectos que se presentan entre los mismos miembros de una relación colaborativa. Como resultado central de la investigación, los entrevistados de las comunidades Indígenas sugieren que la relación colaborativa también tiene lugar al interior del pueblo indígena. O sea, la relación colaborativa tiene que ser una decisión estratégica basada en las prácticas culturales del pueblo indígena. Entonces, es sumamente importante que organizaciones externas colaboradoras sean conscientes de las prácticas de grupos Indígenas. Esto implica un periodo de aprendizaje por parte de colaboradores externos.

Hay factores internos que pueden impedir la colaboración intercultural. La heterogeneidad entre las comunidades del pueblo Ingá incide en los procesos de toma de decisiones internas. Diferencias pueden resultar en distancia social y política entre las comunidades, que obstaculiza comunicación a otros sobre la gestión que están realizando los líderes. Como consecuencia, suceden conflictos entre las comunidades, que puede impedir colaboración por imposibilitar la representación de comunidades en conflicto. Otro factor interno que dificulta la colaboración es la diferencia ontológica entre grupos Indígenas y organizaciones aliadas. Sociedades Indígenas siguen una ontología relacional y muchas organizaciones comprenden el mundo bajo una ontología dualística. La colaboración intercultural implica un período de aprendizaje para las organizaciones externas entender lo que implica por reconocer al pensamiento, las creencias y manera relacional de comprender el mundo.

Los hallazgos de la investigación tienen implicaciones para la práctica colaborativa. Si bien es más difícil manejar los factores externos que impiden la colaboración intercultural, los hallazgos de los factores inhibidores internos tienen implicaciones para la práctica colaborativa. Se deben reconocer y aprovechar los factores externos e internos que facilitan la colaboración intercultural. Los encuestados Indígenas enfatizaron la importancia de respetar las prácticas culturales Indígenas al formar y gestionar relaciones de colaboración con organizaciones externas. El principio fundamental es de “buscar ser Indígenas modernos, sin volverse occidentales y para los occidentales, fue bueno tener relación con este mundo [indígena], pero sin querer pasarse para acá”. En la práctica, la estrategia de colaboración intercultural sería de seguir tanto los protocolos éticos occidentales reglamentarios como los protocolos Indígenas establecidos de trabajo conjunto. O sea, la meta sería de reconocer y respetar protocolos Indígenas que permiten avanzar en la construcción de confianza para el trabajo en colaboración.

Con ese fin, los encuestados Indígenas señalaron la importancia de establecer acuerdos de colaboración por adelantado con organizaciones externas, sobre 1) principios básicos de colaboración, 2) respeto por las ontologías relacionales, y 3) gestión ética del conocimiento indígena. Dichos acuerdos, a su vez, requieren un diálogo intercultural continuo y aprendizaje por parte de organizaciones externas, el reconocimiento de la autonomía indígena como un objetivo fundamental, flexibilidad organizativa y otras prácticas estratégicas. El trabajo en equipo intercultural detrás de la investigación y los hallazgos clave sientan un precedente para la futura colaboración intercultural y por eso una mejor gobernanza.

Conclusiones

Los tres estudios de caso anteriores involucran diferentes países, diferentes proyectos de infraestructura, diferentes historias de relaciones entre el estado y la sociedad, diferentes grupos subalternos y diferentes estrategias para intervenir en la planificación de la infraestructura. Sin embargo, los tres estudios de caso ofrecen ejemplos de estrategias de resistencia que han demostrado que pueden ser efectivas para detener o al menos pausar la concesión de licencias de infraestructura o, alternativamente, trabajar para mitigar los impactos negativos. El caso de la BR-319 en Brasil mostró que las estrategias legales como el CLPI pueden intervenir en la planificación de la infraestructura a través de la invocación de los derechos constitucionales, los acuerdos internacionales y los protocolos Indígenas para la deliberación. El caso de las represas del Alto Madera en la frontera binacional de Bolivia y Brasil mostró que las estrategias de comunicación que involucran la coproducción de conocimiento que combina la experiencia vivida con la ciencia técnica en la investigación participativa impulsada por organizaciones de base y apoyada en el desarrollo de capacidades crea las condiciones para la difusión generalizada de la información para ofrecer contra-narrativas que destaquen los impactos negativos de las represas. El caso de las propuestas de infraestructura estatal y las invasiones de tierras en Caquetá, Colombia, mostró que los pueblos Indígenas y las organizaciones externas pueden trabajar juntos para apoyar diversas estrategias instrumentales efectivas si los socios pueden manejar ciertos factores internos y externos que pueden facilitar o dificultar la colaboración intercultural.

Tales casos ofrecen esperanza e inspiración de que la planificación de la infraestructura puede mejorarse de modo que los proyectos problemáticos se detengan o pausen, o sus impactos negativos se mitiguen o eliminen, mejorando así la eficacia de la gobernanza de la infraestructura. Es innegable que las relaciones de poder y las desigualdades de poder son centrales en la planificación de infraestructura. Los procedimientos habituales a menudo caracterizan la planificación, en la que las preocupaciones sociales y ambientales solo se abordan nominalmente a través de protocolos formales en lugar de eventos ampliamente participativos o recopilación de datos que en realidad modifican o detienen la obra. Los casos de estudio reportados aquí presentan diversos actores subalternos con voces que tienen la autoridad de la experiencia directa y, a menudo, un conocimiento profundo, que forman los fundamentos de las estrategias de base que han sido probadas en el campo y evaluadas críticamente y refinadas. Esas voces y estrategias, a su vez, brindan ejemplos de experiencias donde los proyectos de infraestructura de gran escala se han detenido, como en el caso de la Carretera Marginal en Colombia, o donde el proceso de planificación se ha visto significativamente afectado, como el de la BR-319 en Brasil, o donde los términos del debate han cambiado, como con las represas del Alto Madera en Bolivia.

Estos casos también constituyen ejemplos en que la movilización colectiva en términos de acciones específicas ofrece conclusiones sobre las estrategias para resistir la infraestructura y otros proyectos de desarrollo de arriba hacia abajo. Gran parte del trabajo sobre la resistencia subalterna se ha basado en conceptos de resistencia cotidiana, las “armas de los débiles” (p.ej., Scott 1985) o teorías de movimientos sociales como las que destacan los repertorios tácticos (p.ej., Taylor y van Dyke 2004). Nuestros casos destacan cómo lo primero puede traducirse en lo segundo, cómo formas específicas de acción colectiva pueden

combinarse en estrategias más amplias y cómo los actores subalternos pueden implementar esas estrategias de manera eficaz en el caso de la planificación de infraestructura.

Nuestros casos también llaman la atención sobre la literatura sobre otras estrategias de resistencia a los proyectos de desarrollo. Trabajos recientes han llamado la atención sobre la difusión de los referéndums comunitarios como un medio para ampliar la participación pública en los procesos deliberativos, especialmente para rechazar propuestas estatales o privadas. Este ciertamente ha sido el caso de proyectos mineros en varios países de América Latina (p.ej., Walter y Urkidi 2017). Se puede dedicar un esfuerzo similar a identificar otros casos de resistencia exitosa a proyectos de infraestructura para identificar sus similitudes en términos de partes interesadas, estrategias y perspectivas de gobernanza hacia el futuro.

Declaración de divulgación

Los autores no informaron ningún posible conflicto de intereses.

Financiamiento

Este estudio ha recibido financiación del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la (TCD) de la UF. Partes de la investigación para el alto Madera, sur de Amazonas-norte de Rondonia, y Colombia fueron apoyados por la Fundación Gordon y Betty Moore (Subvención n.º 7715). Los autores son responsables de las interpretaciones y conclusiones de la investigación reportada en esta publicación.

ORCID

Marliz Arteaga  <http://orcid.org/0000-0002-4187-704X>

Sinomar Ferreira da Fonseca Junior  <http://orcid.org/0009-0006-8915-4090>

Martha Rosero-Peña  <http://orcid.org/0000-0001-8035-2361>

Andrea Birgit Chavez Michaelson  <http://orcid.org/0000-0001-9469-7037>

Información sobre los autores

Stephen Perz es profesor de sociología en la Universidad de Florida, EE.UU. Su investigación se centra en la planificación y gobernanza de la infraestructura, destacando las complejidades políticas y los impactos socio-ecológicos. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas internacionales indexadas. Durante más de 20 años, ha trabajado cruzando fronteras disciplinarias, organizacionales y nacionales con diversas partes interesadas en la Amazonía en proyectos científicos, así como de conservación y desarrollo. En 2016, publicó el libro *Cruzando Fronteras para la Colaboración* sobre esos proyectos. Su nuevo libro se titula *El Camino a la Tierra de la Madre de Dios: Una Historia de la Carretera Interoceánica en el Perú*.

Marliz Arteaga es científica ambiental-social y profesional del desarrollo sostenible. Se ha desempeñado como profesora en diferentes universidades de Bolivia y coordinadora de proyectos en diferentes ONGs, especializándose en ecología política, gobernanza ambiental, bioeconomía y sistemas socio-ecológicos. Involucrada en la investigación participativa transdisciplinaria, Marliz colabora a través de diversas redes y proyectos. El impacto de Marliz se expande a sus roles en la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN-Bolivia), el Panel Científico para la Amazonía (SPA) y varias redes de mujeres en la ciencia, incluyendo 500 Mujeres Científicas, la Organización de Mujeres en la Ciencia en el Mundo en Desarrollo (OWSD), la Red de Mujeres en

la Conservación de América Latina y el Caribe, la Iniciativa Tu Beca Bolivia (TBB), y la Asociación Internacional del Agua (IWA).

Sinomar Ferreira da Fonseca Junior es conservacionista y actualmente candidato a doctorado en la Universidad de Florida, centrándose en los derechos de los pueblos indígenas en relación con proyectos de infraestructura. Con más de 18 años de experiencia en la Amazonía brasileña, es ex Director del Sistema de Áreas Protegidas y Coordinador de Agencias Ambientales de Investigación y Monitoreo Ambiental en el Estado de Amazonas. Su experiencia radica en estrategias participativas, principalmente dentro de iniciativas comunitarias en áreas protegidas. Sus actividades académicas giran en torno a la gobernanza ambiental, la ecología política y los estudios de conservación biocultural en la Amazonía.

Martha Rosero-Peña ha sido becaria Fulbright del Programa de Líderes Afrodescendientes, con doctorado en Sociología Ambiental de la Universidad de Florida, Maestría en Ciencias Ambientales y Gerencia de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y pregrado en Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. Con una carrera profesional que abarca casi tres décadas, Martha ha desarrollado amplia experiencia en gestión de programas y proyectos e investigación en temas socioambientales, que incluyen métodos mixtos, análisis espacial y sociohistóricos, gobernanza y cambio climático. Esta ha sido una experiencia construida colaborativamente con ONGs, Pueblos Afrodescendientes e Indígenas en regiones de gran importancia para la conservación tanto en países que comparten la región amazónica como en el Pacífico colombiano. Actualmente se desempeña como directora de la Iniciativa Afro en las Américas de Conservación Internacional, “Territorios Irreemplazables y Personas Resilientes”, la cual incluye nueve países en Meso y Suramérica.

Alba Patricia Consuelo Hernández es artista Plástica egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con un tecnólogo en Producción Multimedia del SENA y una Maestría en Comunicación Transmedia de la Universidad de La Rioja. Su enfoque se centra en respaldar y desarrollar proyectos y estrategias de comunicación para iniciativas socioambientales de ONGs, instituciones académicas y personas. Actualmente, apoya el área de Comunicación de La iniciativa Afro para las Américas de Conservación de Conservación Internacional, y contribuya con la Fundación Humedales en la gestión de comunicación para proyectos de ordenación pesquera con comunidades de pescadores y comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales en cuencas colombianas clave.

Waira Jacanamijoy apoya la Coordinación del Área de Cultura y Comunicaciones en el Marco del plan de vida de la Asociación Tandachiridu Inganokuna. Delegada de los pueblos indígenas en el departamento del Caquetá al Consejo Territorial de Seguridad Social. Investigadora en Artes contemporáneas Indígenas sobre Memoria y resistencia del Pueblo Inga y asesora la Implementación del proyecto educativo en la Institución educativa Yachaikury. Acompaña procesos locales, tales como la formulación de las políticas públicas integrales indígenas en el departamento del Caquetá, creación de la Mesa de Concertación y la formulación del Proyecto Educativo del pueblo Inga en Colombia y la Formulación del plan de Salvaguarda Inga de Colombia.

Flora Macas es licenciada en ciencias sociales con énfasis en Antropología Aplicada y especialización en Pedagogía, graduada con honores de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y de la Universidad de la Amazonia. Desde hace más de 20 años apoya los procesos organizativos y culturales de Tandachiridu Inganokuna, principalmente en direccionar sus procesos Educativos como la creación de la Institución Educativa Yachaikury y la coordinación de Educación de los pueblos indígenas del departamento del Caquetá. Delegada Oficial de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONT-CEPI). Disertante en varios encuentros internacionales de mujeres indígenas sobre liderazgo, educación y sabiduría en Bolivia, Perú, Brasil y Ecuador. Capacitadora en procesos de formación a líderes y etnoeducadores Indígenas de los distintos pueblos indígenas del departamento del Caquetá.

Andrea Birgit Chavez Michaelsen recibió su Ph.D. en Geografía. Desde 2009, Andrea trabaja en iniciativas de desarrollo de capacidades a través de investigación aplicada, capacitación y actividades de extensión en temáticas de variabilidad y vulnerabilidad al cambio climático, políticas públicas ambientales, conservación de la biodiversidad, comunidades indígenas y teledetección. Andrea trabaja en la interfaz entre la universidad y la comunidad para mejorar las colaboraciones potenciales que promueven la educación inter- e transdisciplinaria, y los enfoques innovadores de desarrollo sostenible en las universidades latinoamericanas y los gobiernos locales. Andrea es la Coordinadora de EPIC-LAC y también está afiliada Centro de Estudios Latinoamericanos y el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida. Es consultora del Instituto Inter-Americano de Estudios Globales, Uruguay.

Alexandra Sabo es investigadora en el área de geografía humana interesada en los impactos sociales del desarrollo hidroeléctrico. Actualmente trabaja con organizaciones conservacionistas de todo el mundo en el área de desarrollo de capacidades, particularmente en las áreas de acceso a la información y desarrollo del liderazgo.

Robert Buschbacher es Coordinador del Programa de Gobernanza e Infraestructura en la Comunidad de Práctica y Aprendizaje Amazónico, una iniciativa del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida. Buschbacher es un ecólogo de sistemas interesado en la resiliencia y la gestión colaborativa de sistemas socio-ecológicos complejos. Fue director del Programa de Conservación de WWF-Brasil y coordinó el programa Bosques Trabajando en los Trópicos de la UF y la Iniciativa de Liderazgo para la Conservación de la Amazonía.

Referencias

- Adade Williams, P., L. Sikutshwa, y S. Shackleton. 2020. “Reconocer el conocimiento indígena y local para facilitar la colaboración en enfoques paisajísticos: Lecciones de una revisión sistemática” [Acknowledging Indigenous and Local Knowledge to Facilitate Collaboration in Landscape Approaches – Lessons from a Systematic Review]. *Land* 9 (9): 331. <https://doi.org/10.3390/land9090331>.
- Agrawal, A., y C. C. Gibson. 1999. “Encantamiento y desencanto: El papel de la comunidad en la conservación de los recursos naturales” [Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation]. *World Development* 27 (4): 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2).
- Alencar, A., D. Nepstad, D. McGrath, P. Moutinho, P. Pacheco, M. D. C. V. Diaz, y B. Soares Filho. 2004. *Deforestación en la Amazonía: más allá de la “emergencia crónica”* [Desmatamento na Amazônia: Indo Além da “Emergência Crônica”]. Belém: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.
- APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). 2013. “Carta Pública de APIB sobre la Regulación del Derecho a los Procedimientos de Consulta Garantizados por el Convenio 169 de la OIT.” *Brasília é Colorida de Urucum por 3 Mil Mulheres Indígenas em Protesto pelos seus Direitos* 26:1–3. <http://apib.info/2019/08/13/brasilia-e-colorida-de-urucum-por-3-mil-mulheres-indigenas-em-protesto-pelos-seus-direitos/>.
- Armitage, D., R. de Loe, y R. Plummer. 2012. “Gobernanza ambiental y sus implicaciones para las prácticas de conservación” [Environmental Governance and its Implications for Conservation Practice]. *Conservation Letters* 5 (4): 245–255. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00238.x>.
- Atentas, J. M. 2009. “El Complejo del Río Madera: Impacto Socioambiental en la Amazonia Boliviana y Resistencia Social” [The Madera River Complex: Socio-Environmental Impact in Bolivian Amazonia and Social Resistance]. *Capitalism Nature Socialism* 20 (3): 12–20. <https://doi.org/10.1080/10455750903215712>.
- Balazote, A. O., y L. D. Hocsman, eds. 2013. *Conflictividad Agraria y Defensa del Territorio Campesino-Indígena en América Latina*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

- Banco Mundial. 1994. *Informe sobre el desarrollo mundial 1994: Infraestructura para el desarrollo* [World Development Report 1994: Infrastructure for Development]. Washington, DC: Banco Mundial.
- Banco Mundial. 2020. “Datos soberanos ambientales, sociales y de gobernanza: Datos, herramientas y orientación” [Sovereign Environmental, Social and Governance Data: Data, Tools and Guidance]. <https://datatopics.worldbank.org/esg/framework.html>.
- Barber, C. P., M. A. Cochrane, C. M. Souza, y W. F. Laurance. 2014. “Carreteras, deforestación y el efecto mitigador de las áreas protegidas en la Amazonia” [Roads, Deforestation, and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon]. *Biological Conservation* 177:203–209. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.07.004>.
- Bennett, N. J., y T. Satterfield. 2018. “Gobernanza ambiental: Un marco práctico para guiar el diseño, la evaluación y el análisis” [Environmental Governance: A Practical Framework to Guide Design, Evaluation, and Analysis]. *Conservation Letters* 11 (6): 113. <https://doi.org/10.1111/conl.12600>.
- Berkes, F. 2017. “¿Gobernanza ambiental para el Antropoceno? Sistemas socioecológicos, resiliencia y aprendizaje colaborativo” [Environmental Governance for the Anthropocene? Socio-Ecological Systems, Resilience, and Collaborative Learning]. *Sustainability* 9 (7): 1232. <https://doi.org/10.3390/su9071232>.
- Blaser, M. 2013. “Los conflictos ontológicos y las historias de los pueblos a pesar de Europa hacia una conversación sobre ontología política” [Ontological Conflicts and the Stories of Peoples in Spite of Europe toward a Conversation on Political Ontology]. *Current Anthropology* 54 (5): 547–568. <https://doi.org/10.1086/672270>.
- Borras, S. M., Jr., C. Kay, S. Gomes, y J. Wilkinson. 2012. “Acaparamiento de tierras y acumulación capitalista global: Características clave en América Latina” [Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America]. *Canadian Journal of Development Studies* 33 (4): 402–416. <https://doi.org/10.1080/02255189.2012.745394>.
- Bourguignon, F., y B. Pleskovic. 2007. *Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Economía del Desarrollo 2007. Repensar la infraestructura para el desarrollo* [Annual World Bank Conference on Development Economics 2007. Rethinking Infrastructure for Development]. Washington, DC: Banco Mundial.
- Brasil. 2004. “Decreto N° 5.051, de 19 de abril. Promulga el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.” *Diario Oficial da Uniao* (Volume D). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5051.htm#textoimpressao.
- Buijs, A., T. J. M. Mattijssen, A. P. N. Van der Jagt, B. Ambrose-Oji, E. Andersson, B. H. M. Elands, y M. Steen Moller. 2016. “Ciudadanía activa para la infraestructura verde urbana: Fomento de la diversidad y la dinámica de las contribuciones ciudadanas a través de una gobernanza mosaico” [Active Citizenship for Urban Green Infrastructure: Fostering the Diversity and Dynamics of Citizen Contributions through Mosaic Governance]. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 22:1–6. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.002>.
- Carlos, H. S. A., y F. A. de Meirelles. 2018. *Análisis de la Implementación de Unidades de Conservación bajo la Influencia de la Carretera BR-319*. Manaus: IDESAM.
- Carruthers, D., ed. 2008. *Justicia ambiental en América Latina: Problemas, promesa, práctica* [Environmental Justice in Latin America: Problems, Promise, Practice]. Cambridge, MA: MIT Press.
- CMP (Conservation Measures Partnership). 2020. “Marco de Acciones de Conservación 2.0” [Conservation Actions Framework 2.0]. <https://www.conservationmeasures.org/>.
- Correa, F., P. Erikson, y A. Surrallés, eds. 2016. *Política y Poder en la Amazonia: Estrategias de los Pueblos Indígenas en los Nuevos Escenarios en los Países Andinos*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Davidson, E. A., A. C. de Araújo, P. Artaxo, J. K. Balch, I. F. Brown, M. M. C. Bustamante, M. T. Coe, R. S. DeFries, M. Keller, M. Longo, et al. 2012. “La cuenca del Amazonas en transición” [The Amazon Basin in Transition]. *Nature* 481 (7381): 321–329. <https://doi.org/10.1038/nature10717>.

- De Castro, F., Hogenboom, B., y M. Baud, eds. 2016. *Gobernanza ambiental en América Latina* [Environmental Governance in Latin America]. New York, NY: Palgrave MacMillan.
- Delgado, T. V., y T. Vásquez. 2015. *Territorios, Conflicto Armado y Política en Caquetá, 1900–2010*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Devlin, J. F., y N. T. Yap. 2008. “Políticas contenciosas en evaluación ambiental: Proyectos bloqueados y coaliciones ganadoras” [Contentious Politics in Environmental Assessment: Blocked Projects and Winning Coalitions]. *Impact Assessment and Project Appraisal* 26 (1): 17–27. <https://doi.org/10.3152/146155108X279939>.
- Dietz, T., E. F. Ostrom, y P. C. Stern. 2003. “La lucha por gobernar las tierras comunales” [The Struggle to Govern the Commons]. *Science* 302 (5652): 1907–1912. <https://doi.org/10.1126/science.1091015>.
- DNIT (Departamento Nacional de Transporte e Infraestrutura). 2021. “Audencia Pública sobre la BR-319, Manaus.” <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/notas/2021/ibama-realiza-audiencias-publicas-sobre-a-reconstrucao-pavimentacao-da-br-319>.
- Doria, C. R. C., F. Duponchelle, M. A. L. Lima, A. Garcia, F. M. Carvajal-Vallejos, C. Coca Méndez, M. F. Catarino, C. E. de Carvalho Freitas, B. Veiga, G. Miranda-Chumacero, y P. A. Van Damme. 2018. “Revisión del uso y estado de los recursos pesqueros en la cuenca del río Madera (Brasil, Bolivia y Perú) antes de la finalización de la presa hidroeléctrica” [Review of Fisheries Resource Use and Status in the Madera River Basin (Brazil, Bolivia, and Peru) before Hydroelectric Dam Completion]. *Reviews in Fisheries Science and Aquaculture* 26 (4): 494–514. <https://doi.org/10.1080/23308249.2018.1463511>.
- Doria, C. R. C., J. Dutka-Gianelli, S. T. B. de Sousa, J. Chu, y T. M. Garlock. 2021. “Comprensión de los impactos de las represas en la pesca en pequeña escala del río Madera a través de la lente de los indicadores de desempeño pesquero” [Understanding Impacts of Dams on Small-Scale Fisheries of the Madera River through the Lens of the Fisheries Performance Indicators]. *Marine Policy* 125:104261. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104261>.
- Dourojeanni, M. J., A. Barandiarán, y D. Dourojeanni. 2010. *Amazonia Peruana en 2021*. 2nd ed. Lima: SPDA/G&G Impresores SAC.
- Dove, M. 2006. “Pueblos indígenas y política ambiental” [Indigenous Peoples and Environmental Politics]. *Annual Review of Anthropology* 35 (1): 191–208. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123235>.
- Duarte, C. 2020. “¿La Violencia hacia los Líderes Sociales es Despolitizada?” <https://vertov14.wordpress.com/2020/02/28/la-violencia-hacia-los-lideres-sociales-es-despolitizada/>.
- ENGESPRO. 2020. *Análisis de impactos ambientales. EIA/RIA – BR-319/AM. Tramo del Km 250,70 al Km 656,40*. Brasília: DNIT, Ministério da Infraestrutura. <https://drive.google.com/drive/folders/12sM1Q4u4MtHNFITV2lhhRjCizACyrBfz>.
- Escalante-Moreno, H. 2017. “De IIRSA-COSIPLAN a la Iniciativa de la Franja y la Ruta: Infraestructura para el extractivismo en América Latina” [From IIRSA-COSIPLAN to the Belt and Road Initiative: Infrastructure for Extractivism in Latin America]. In *East Asia, Latin America, and the Decolonization of Transpacific Studies*, editado por C. Olivieri and J. Serrano-Muñoz, 89–114. Cham: Palgrave MacMillan.
- Escobar, A. 2018. *Diseños para el pluriverso: Interdependencia radical, autonomía y creación de mundos* [Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds]. Durham, NC: Duke University Press.
- Esteves, A. M., D. Franks, y F. Vanclay. 2014. “Evaluación de impacto social: El estado del arte” [Social Impact Assessment: The State of the Art]. *Impact Assessment and Policy Appraisal* 30:34–42. <https://doi.org/10.1080/14615517.2012.660356>.
- Evans, J. P. 2012. *Gobernanza ambiental* [Environmental Governance]. New York, NY: Routledge.
- Fay, M., L. A. Andrés, C. Fox, U. Narloch, F. Straub, y M. Slawson. 2017. *Repensar la infraestructura en América Latina y el Caribe: gastar mejor para lograr más* [Rethinking Infrastructure in Latin America and the Caribbean: Spending Better to Achieve More]. Washington, DC: Banco Mundial.

- Fearnside, P. M. 2014. “Las represas del río Madera en Brasil: Un revés para la política ambiental en el desarrollo amazónico” [Brazil’s Madera River Dams: A Setback for Environmental Policy in Amazonian Development]. *Water Alternatives* 7 (1): 256–269.
- Fearnside, P. M. 2020. “BR-319: El principio del fin de la selva amazónica de Brasil” [Br-319: The Beginning of the End for Brazil’s Amazon Forest]. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2020/11/br-319-the-beginning-of-the-end-for-brazils-amazon-forest-commentary/>.
- Fearnside, P. M. 2022. “Servicios Ambientales Amazónicos: Por qué la carretera BR-319 de Brasil es tan dañina” [Amazon Environmental Services: Why Brazil’s Highway Br-319 Is so Damaging]. *Ambio* 51 (6): 1367–1370. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01718-y>.
- Fearnside, P. M., y W. F. Laurance. 2012. “Infraestrutura na Amazonia: As Lições dos Planos Plurianuais.” *Caderno CRH* 25 (64): 87–98. <https://doi.org/10.1590/S0103-49792012000100007>.
- Fearnside, P. M., W. F. Laurance, M. A. Cochrane, S. Bergen, P. D. Sampaio, C. Barber, S. D’Angelo, y T. Fernandes. 2012. “Infraestructura en la Amazonia: Lecciones de los planes plurianuales” [O Futuro da Amazonia: Modelos para Prever as Consequencias da Infraestrutura Futura nos Planos Plurianuais]. *Novos Cadernos NAEA* 15 (1): 25–52. <https://doi.org/10.5801/ncn.v15i1.10828>.
- Ferrante, L., y P. M. Fearnside. 2022. “Los países deberían boicotear a Brasil por la deforestación impulsada por las exportaciones” [Countries Should Boycott Brazil Over Export-Driven Deforestation]. *Nature* 601 (7893): 318. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-00094-7>.
- Ferrante, L., M. Gomes, y P. M. Fearnside. 2020. “Los pueblos indígenas amazónicos están amenazados por la carretera BR-319 de Brasil” [Amazonian Indigenous Peoples are Threatened by Brazil’s Highway Br-319]. *Land Use Policy* 94:104548. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104548>.
- Flores Rangel, J. A. 2015. “Infraestructura Carretera: Construcción, Financiamiento y Resistencia en México y América Latina.” *Revista Transporte y Territorio* 13 (2): 122–148.
- Fonseca-Junior, S. F. 2021. “Caja de herramientas jurídicas para comunidades tradicionales e indígenas de la Amazonía brasileña” [Caixa de Ferramentas Legais a Comunidades Tradicionais e Indígenas da Amazônia Brasileira]. <https://giamazon.org/>.
- GIA (Governance and Infrastructure in the Amazon). 2022. “Comunidad PanAmazónica de Práctica y Aprendizaje” [Pan Amazon Community of Practice and Learning]. <https://giamazon.org/>.
- Glasson, J., y R. Therivel. 2012. *Introducción a la Evaluación de Impacto Ambiental* [Introduction to Environmental Impact Assessment]. 4th ed. London: Routledge.
- Gómez, A., L. Wagner, B. Torres, F. Martín, y F. Rojas. 2014. “Resistencias sociales en contra de los megaproyectos hídricos en América Latina.” *European Review of Latin American and Caribbean Studies* (97): 75–96. <https://www.jstor.org/stable/23972441>.
- González Perafán, L. 2020. “Indepaz: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.” <https://indepaz.org.co/author/leonardo/>.
- Groves, C., M. Munday, y N. Yakovleva. 2013. “Luchando contra la tubería: gobernanza neoliberal y barreras para la participación comunitaria efectiva en la planificación de la infraestructura energética” [Fighting the Pipe: Neoliberal Governance and Barriers to Effective Community Participation in Energy Infrastructure Planning]. *Environment and Planning C: Politics and Space* 31 (2): 340–356. <https://doi.org/10.1068/c11331r>.
- Hernández-Gutiérrez, J. C., J. A. Peña-Ramos, y V. I. Espinosa. 2022. “Las centrales hidroeléctricas como infraestructuras en disputa en América Latina” [Hydro Power Plants as Disputed Infrastructures in Latin America]. *Water* 14 (3): 277. <https://doi.org/10.3390/w14030277>.
- Herrera Chimbo, G. C., L. O. Señalín Morales, y J. M. Pupo Francisco. 2016. “El Subdesarrollo Social como Consecuencia de la Exclusión de Participación Ciudadana referente a la Planificación Presupuestaria de Infraestructura Pública.” *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. <http://www.eumed.net/rev/caribe/2016/09/infraestructura.html>.
- Human Rights Watch Colombia. 2020. “Informe Mundial 2020: Colombia” [World Report 2020: Colombia]. <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/colombia>.

- Huxham, C., y S. Vangen. 2004. *Gestionar para colaborar: la teoría y la práctica de la ventaja colaborativa* [Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage]. London: Routledge.
- Kay, C. 2007. “Tierra, conflictos y violencia en América Latina” [Land, Conflict, and Violence in Latin America]. *Peace Review* 1 (1): 5–14. <https://doi.org/10.1080/10402650601181808>.
- Kay, C., y G. Salazar. 2001. “Estructura Agraria, Conflicto y Violencia en la Sociedad Rural de América Latina.” *Revista Mexicana de Sociología* 63 (4): 159–195. <https://doi.org/10.2307/3541472>.
- Killeen, T. 2007. *Una tormenta perfecta en la selva amazónica: desarrollo y conservación en el contexto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA)* [A Perfect Storm in the Amazon Wilderness: Development and Conservation in the Context of the Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America (IIRSA)]. Arlington, VA: Conservation International.
- Lemos, M. C., y A. Agrawal. 2006. “Gobernanza ambiental” [Environmental Governance]. *Annual Review of Environment and Resources* 31 (1): 297–325. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>.
- Lucas, K. 2012. “Transporte y exclusión social: ¿Dónde estamos ahora?” [Transport and Social Exclusion: Where are We Now?]. *Transport Policy* 20:105–113. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013>.
- Marengo, J. A., C. M. Souza Jr., K. Thonicke, C. Burton, K. Halladay, R. A. Betts, L. M. Alves, y W. R. Soares. 2018. “Cambios en el clima y el uso del suelo en la región amazónica: Variabilidad y tendencias actuales y futuras” [Changes in Climate and Land Use over the Amazon Region: Current and Future Variability and Trends]. *Frontiers in Earth Science* 6:228. <https://doi.org/10.3389/feart.2018.00228>.
- McCullough, A. 2017. “Evaluaciones de impacto ambiental en países en desarrollo: Necesitamos hablar de política” [Environmental Impact Assessments in Developing Countries: We Need to Talk about Politics]. *Extractive Industries and Society* 4 (3): 448–452. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.07.002>.
- Mercado Mott, M., and M. Macias. 2016. “Nunca más una UNASUR sin Nosotros: Análisis de la Situación de los Bienes Comunes y Propuestas Indígenas para la Integración de la Región.” *Crítica y Resistencias* 2:68–86.
- Mollett, S. 2016. “El poder de saquear: repensar el acaparamiento de tierras en América Latina” [The Power to Plunder: Rethinking Land Grabbing in Latin America]. *Antipode* 48 (2): 412–432. <https://doi.org/10.1111/anti.12190>.
- Mora, A. I., Z. M. Bautista, P. Bustamante, C. Campuzano, C. E. Cortes, L. M. Echeverría, M. A. Franco, E. A. Gomez, A. Gumucio, M. A. Henao, et al., 2014. *Comunicación Educación: Un Campo de Resistencias*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Morgan, R. K. 2012. “Evaluación de Impacto Ambiental: El Estado del Arte” [Environmental Impact Assessment: The State of the Art]. *Impact Assessment and Project Appraisal* 30 (1): 5–14. <https://doi.org/10.1080/14615517.2012.661557>.
- MPF. 2021b. “Recomendación – Referencia PA N° 1.13.000.000307/2014-19. Recomendado: Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA).” Procuradoria da República do Estado do Amazonas, MPF. <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento.Chave1382379D.7CB80823.631060D1.E05C135D>.
- MPF (Ministerio Público Federal). 2021a. “Recomendación Legal N° 11-2021-PR-AM-00040501/2021.” [Recomendação Legal No. 11-2021-PR-AM-00040501/2021]. Procuradoria da República do Estado do Amazonas, MPF. <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento.Chave8e222370.95eb9590.47ffb5cd.b6c7f923>.
- Observatório BR-319. 2021. “Observatorio BR-319 se posiciona en contra de la realización de audiencias públicas sobre obras viales durante la pandemia.” <https://iieb.org.br/observatorio-br-319-se-posiciona-contr-a-realizacao-de-audiencias-publicas-sobre-obras-na-rodovia-durante-a-pandemia/>.

- OIT (Organización Internacional de Trabajo). 1989. “C169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales” [C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention]. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169.
- OPIPAM (Associação do Povo Indígena Parintintin do Amazonas). 2021. “Nota de la Asociación del Pueblo Indígena Parintintin de Amazonas – OPIPAM contra la realización de Audiencias Públicas sobre el Licenciamiento Ambiental del Tramo Medio de la BR-319.” *Documento inédito*.
- Oviedo, D. 2021. “Estableciendo vínculos entre accesibilidad, desigualdad social y espacial y exclusión social: un marco para las ciudades de América Latina” [Making the Links between Accessibility, Social and Spatial Inequality, and Social Exclusion: A Framework for Cities in Latin America]. *Advances in Transport Policy and Planning* 8:135–172. <https://doi.org/10.1016/bs.atpp.2021.07.001>.
- Paavola, J. 2007. “Instituciones y gobernanza ambiental: Una reconceptualización” [Institutions and Environmental Governance: A Reconceptualization]. *Ecological Economics* 63 (1): 93–103. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.09.026>.
- Papillon, M., y T. Rodon. 2017. “Acuerdos entre proponentes e indígenas y la implementación del derecho al consentimiento libre, previo e informado en Canadá” [Proponent-Indigenous Agreements and the Implementation of the Right to Free, Prior, and Informed Consent in Canada]. *Environmental Impact Assessment Review* 62:216–224. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.06.009>.
- PARES (Paz y Reconciliación). 2020. “Plomo es lo Que Hay: Violencia y Seguridad en Tiempos de Duque.” https://e7c20b27-21c2-4f2b-9c38-a1a16422794e.usrfiles.com/ugd/e7c20b_476fc49ae03d4dbdbf5e6698ad7e9b98.pdf.
- Pereira Covarriubas, A., y E. Raju. 2020. “La política de la gobernanza del riesgo de desastres y el neoextractivismo en América Latina” [The Politics of Disaster Risk Governance and Neo-Extractivism in Latin America]. *Politics and Governance* 8 (4): 220–231. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3147>.
- Perz, S. G. 2012. “Social Mobilization in Protest of Trans-Boundary Highway Projects: Explaining Contrasting Implementation Outcomes.” *Development and Change* 43 (3): 797–821. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2012.01773.x>.
- Perz, S. G. 2018. “Movilización social en protesta por proyectos de carreteras transfronterizas: explicación de los resultados contrastantes de su implementación” [Roads and Development: Plans, Impacts and Contestation into the 21st Century]. *Development and Change (Edición Virtual Especial Sobre Caminos)*:1–18. <https://doi.org/10.1111/dech.12359>.
- Perz, S. G., S. Brillhante, I. F. Brown, M. Caldas, S. Ikeda, E. Mendoza, C. Overdeest, V. Reis, J. F. Reyes, D. Rojas, M. Schminck, C. Souza, y R. Walker. 2008. “Construcción de carreteras, uso de la tierra y cambio climático: Perspectivas para la gobernanza ambiental en la Amazonía” [Road Building, Land Use and Climate Change: Prospects for Environmental Governance in the Amazon]. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 363 (1498): 1889–1895. <https://doi.org/10.1098/rstb.2007.0017>.
- PNUD (Programa de Naciones Unidas de Desarrollo) 2014. “Gobernanza para el desarrollo sostenible: integración de la gobernanza en el marco de desarrollo post-2015.” [Governance for Sustainable Development: Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework]. www.undp.org.
- Ramírez, M. C. 2022. “Reconfiguración del Conflicto Armado en Coyunturas de Transición: Nuevas y Viejas Dinámicas de los Grupos Armados no Estatales y su Incidencia en la Vida Cotidiana de la Población Civil de Putumayo (Colombia).” *Maguaré* 36 (2): 161–204. <https://doi.org/10.15446/mag.v36n2.102864>.
- REET Brasil 2020. “Manifiesto de REET Brasil sobre la Pavimentación del Tramo del km 250 al km 655,70 de la Carretera BR319/AM y su Efecto en las Áreas de Preservación Permanente, Amazonas, Brasil.” [Manifiesto REET Brasil sobre a Pavimentação do Trecho do km 250 ao km 655.70 da Rodovia BR319/AM e seu Efeito nas Áreas de Preservação Permanente, Amazonas, Brasil]. <https://www.oeco.org.br/wp-content/uploads/2020/11/MANIFESTO-REET-BRASIL-SOBRE-APPs-E-BR-319-Final-03.11.20.pdf>.

- Rentería, M. A. S. 2017. “Movimientos de Resistencia Campesina e Indígena contra los Megaproyectos y el Modelo Extractivista.” *El Cotidiano* 106 (1): 7–16.
- Ritter, C. D., G. McCrate, R. H. Nilsson, P. M. Fearnside, U. Palmer, y A. Antonelli. 2017. “Evaluación de Impacto Ambiental en la Amazonia Brasileña: Desafíos y Perspectivas para Evaluar la Biodiversidad” [Environmental Impact Assessment in Brazilian Amazonia: Challenges and Prospects to Assess Biodiversity]. *Biological Conservation* 206:161–168. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.12.031>.
- Rojas Garzón, B. 2016. *Derecho a la Consulta y Consentimiento de los Pueblos Indígenas, Quilombolas y Comunidades Tradicionales* [Direito à Consulta e Consentimento de Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais]. São Paulo, Brasil: Rede de Cooperação Amazônica.
- Rosenbaum, W. 2017. *Política y política ambiental* [Environmental Politics and Policy]. 10th ed. Thousand Oaks, CA: CQ Press/Sage.
- Sánchez Jaramillo, J. F. 2021. “Colombia: La Amazonia como Sujeto de Derechos y su Defensa Intergeneracional desde Caquetá.” *Iberoamérica Social: Revista-Red De Estudios Sociales* 17:66–88.
- Sandholt Jensen, P., y T. Vittrup Sørensen. 2012. “Desigualdad de tierras y conflictos en América Latina en el siglo XX” [Land Inequality and Conflict in Latin American in the Twentieth Century]. *Defence and Peace Economics* 23 (1): 77–94. <https://doi.org/10.1080/10242694.2011.558726>.
- Santos, R. E., R. M. Pinto-Coelho, R. Fonseca, N. R. Simões, y F. B. Zanchi. 2018. “El declive de la pesca en el río Madera, Brasil: El alto costo de las represas hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas” [The Decline of Fisheries on the Madera River, Brazil: The High Cost of the Hydroelectric Dams in the Amazon Basin]. *Fisheries Management and Ecology* 25 (5): 380–391. <https://doi.org/10.1111/fme.12305>.
- Santos, M. A., A. M. Yanai, F. O. F. de, I. S. P. Sousa, H. O. de, A. C. R. Paulo, F. L. da Silva, P. M. L. A. Graça de, y P. M. Fearnside. 2018. *BR-319 como Propulsora de Desmatamento: Simulando o Impacto da Rodovia Manaus-Porto Velho*. Manaus: Idesam. <https://idesam.org/publicacao/simula-desmatamento-br319.pdf>.
- Saure, V. 2020. “Políticas Públicas e Dinâmicas Territoriais no Oeste do Pará.” En *Políticas Públicas e Dinâmicas Territoriais no Oeste do Pará* editado por M. J. B. Barros, 211–232. Belém: Editora Itacaiúnas. <https://doi.org/10.36599/itac-ed1.013>.
- Schapper, A., C. Unrau, y S. Killoh. 2020. “Movilización social contra las grandes represas hidroeléctricas: una comparación entre Etiopía, Brasil y Panamá” [Social Mobilization against Large Hydroelectric Dams: A Comparison of Ethiopia, Brazil and Panama]. *Sustainable Development* 28 (2): 413–423. <https://doi.org/10.1002/sd.1995>.
- Scott, J. C. 1985. *Armas de los débiles: formas cotidianas de resistencia campesina* [Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance]. New Haven, CT: Yale University Press.
- Silva, E., M. Akchurin, y A. Bebbington. 2018. “Efectos políticos de la resistencia contra los megaproyectos en América Latina” [Policy Effects of Resistance against Mega-Projects in Latin America]. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*. 106:25–46. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26608619>.
- Snow, D. A., S. A. Soule, y H. Kriesi, eds. 2004. *Compañero de Blackwell a Los Movimientos Sociales* [Blackwell Companion to Social Movements]. Malden, MA: Blackwell.
- Stocks, A. 2005. “Demasiado para muy pocos: Problemas de derechos territoriales indígenas en América Latina” [Too Much for Too Few: Problems of Indigenous Land Rights in Latin America]. *American Review of Anthropology* 34:85–104. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.33.070203.143844>.
- Svampa, M. 2019. *Las Fronteras del Extractivismo en América Latina: Conflictos Socioambientales, Giro Ecoterritorial y Nueva Dependencia*. Buenos Aires: CALAS.
- Taylor, V., y N. van Dyke. 2004. “‘Get Up, Stand Up’: Tactical Repertoires of Social Movements” [‘Levántate, levántate’: Repertorios tácticos de los movimientos sociales]. En *Blackwell Companion to Social Movements*, editado por D. A. Snow, S. A. Soule, and H. Kriesi, 262–293. Malden, MA: Blackwell.

- Tetreault, D., C. McCulligh, y C. Lucio, eds. 2019. “Despojo, Conflictos Socioambientales y Alternativas en México.” En *Migración, Cultura y Estudios de Género desde la Perspectiva Regional*, 712–719. Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. Ciudad de México: UNAM.
- Tomlinson, K. 2019. “Derechos indígenas y proyectos de recursos extractivos: negociaciones sobre la política y la implementación del CLPI” [Indigenous Rights and Extractive Resource Projects: Negotiations over the Policy and Implementation of FPIC]. *International Journal of Human Rights* 23 (5): 880–897. <https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1314648>.
- Vanclay, F. 2003. “Principios internacionales para la evaluación del impacto social” [International Principles for Social Impact Assessment]. *Impact Assessment and Project Appraisal* 21:5–12. <https://doi.org/10.3152/147154603781766491>.
- Verdum, R. 2007. *Infraestrutura e Políticas Territoriais do Brasil no Contexto da Integração Sul-Americana*. Washington, DC: Center for International Policy.
- Verdum, R. 2012. “Obras de infraestrutura del PAC y pueblos indígenas en la Amazonía brasileña.” INESC, Observatorios de Invetimentos na Amazonia. https://indiosnonordeste.com.br/wp-content/uploads/2012/10/INESC_2012_IndiosePAC.pdf.
- Vizeu Pinheiro, M., L. Rojas Sanchez, S. Chamness Long, y A. Ponce. 2020. “Indicadores de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe” [Environmental Governance Indicators for Latin America and The Caribbean]. Inter-American Development Bank & World Justice Project. <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Environmental-Governance-Indicators-for-Latin-America-the-Caribbean.pdf>.
- Waddington, H., A. Sonnenfeld, J. Finetti, M. Gaarder, D. John, y J. Stevenson. 2019. “Participación ciudadana en los servicios públicos en países de ingresos bajos y medios: Una revisión sistemática de métodos mixtos de las iniciativas de participación, inclusión, transparencia y responsabilidad (PITR)” [Citizen Engagement in Public Services in Low- and Middle-Income Countries: A Mixed-Methods Systematic Review of Participation, Inclusion, Transparency and Accountability (PITA) Initiatives]. *Campbell Collaboration*. 15:1–90. <https://doi.org/10.1002/cl2.1025>.
- Wagner Tizón, A., y R. S. Gadea Duarte, eds. 2002. *La Integración Regional entre Bolivia, Brasil y Peru*. Lima: Centro Peruano de Estudios Internacionales.
- Walter, M., y L. Urkidi. 2017. “Consultas comunitarias sobre minería en América Latina (2002–2012): El controvertido surgimiento de una institución híbrida para la participación” [Community Mining Consultations in Latin America (2002–2012): The Contested Emergence of a Hybrid Institution for Participation]. *Geoforum* 84:265–279. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.09.007>.
- Wang, D. J., y S. A. Soule. 2012. “Colaboración organizacional de movimientos sociales: Redes de aprendizaje y difusión de tácticas de protesta, 1960–1995” [Social Movement Organizational Collaboration: Networks of Learning and the Diffusion of Protest Tactics, 1960–1995]. *American Journal of Sociology* 117 (6): 1674–1722. <https://doi.org/10.1086/664685>.
- Watkins, G., S.-U. Mueller, H. Meller, M. C. Ramirez, T. Serebrisky, y A. Geogoulias. 2017. “Lecciones de cuatro décadas de conflictos relacionados con proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe” [Lessons from Four Decades of Infrastructure Project-Related Conflicts in Latin America and the Caribbean]. Inter-American Development Bank (IDB). <https://digitalcommons.fiu.edu/srhreports/critical-infrastructure/critical-infrastructure/36/>.
- Wegrich, K., G. Kostka, y G. Hammerschmid, eds. 2017. *La gobernanza de la infraestructura* [The Governance of Infrastructure]. Oxford: Oxford University Press.
- Zhour, A. 2010. “‘Fuerzas adversas’ en la Amazonía brasileña: Desarrollismo versus ambientalismo y derechos indígenas” [‘Adverse Forces’ in the Brazilian Amazon: Developmentalism versus Environmentalism and Indigenous Rights]. *Journal of Environment and Development* 19 (3): 252–273. <https://doi.org/10.1177/1070496510378097>.